

Programa de Investigación sobre el
Movimiento de la Sociedad Argentina

Documento de Trabajo N° 33

Las huelgas generales, Argentina 1983-2001:
un ejercicio de periodización.

Nicolás Iñigo Carrera

Introducción

Este trabajo es un ejercicio de periodización. En él se propone utilizar la huelga general como indicador, intentando contribuir a la realización de una periodización de la historia argentina reciente que tome como dimensión general los conflictos y enfrentamientos sociales (en este caso protagonizados por los obreros) y no solamente los cambios en la administración del gobierno¹. Presenta resultados de investigación referidos a las huelgas generales en las décadas de 1980 y 1990.

En este ejercicio se privilegia la huelga por ser la forma de lucha de los explotados propia del modo de producción capitalista en general, lo que le da su especificidad dentro del conjunto (y escala) de formas de lucha que utiliza la clase obrera (motín, parlamentaria, insurrección, guerra, etc.). Es inherente al sistema asalariado, vigente en el modo productivo y régimen social del capital en general, y constituye el instrumento principal en la “guerra de guerrillas”² de los trabajadores contra los efectos de ese régimen.

Dentro de la forma huelga, el ejercicio está centrado en la observación de las huelgas generales, momento en que los trabajadores se unen contra el conjunto de los capitalistas, y se encuentran con el gobierno del estado (con lo que la lucha deviene política³), sea porque éste expresa el poder de los capitalistas en un conflicto determinado, sea porque los obreros se proponen establecer o defender una legislación favorable a sus intereses inmediatos⁴.

Criterios de periodización

El criterio de periodización generalmente utilizado en los análisis de las huelgas generales recientes remite a los cambios en la administración del gobierno del estado, enfatizándose la

¹ El trabajo se inserta en el campo de problemas referido a la periodización de las luchas de los obreros. Por poner dos ejemplos, que toman distintos aspectos de las luchas sociales y su vinculación con los momentos que recorre una sociedad determinada utilizando diferentes criterios: Hobsbawm, Eric, *Economic fluctuations and some social movements since 1800* en *Labouring Men*, London, Widenfeld and Nicolson, 1968. Marx, Carlos; *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*, varias ediciones.

² Marx, Carlos; *Salario, precio y ganancia*.

³ Que la lucha devenga política nada dice acerca de la forma de conciencia de su situación y cómo superarla (reformista o revolucionaria) que tienen los obreros.

⁴ En la huelga general se expresa potencialmente, no importa la conciencia que de ello tengan sus protagonistas, la lucha contra la forma de organización social vigente basada en la relación capital – trabajo asalariado. Claro que sólo realiza su potencia y alcanza su forma desarrollada cuando pone en cuestión la organización del poder del estado, y entonces ya ha sido superado el estadio de huelga general. A partir de cierto momento del desarrollo histórico, la huelga deja de ser la forma fundamental o principal para devenir forma auxiliar o subordinada. Es por eso que la función o papel de una huelga sólo puede apreciarse en relación con un proceso histórico determinado, incluyendo los problemas vinculados a la superación de la forma de organización social y a la penetración de las luchas de la clase obrera en el sistema institucional jurídico, con la consiguiente institucionalización de formas de organización, como el sindicato, y de lucha, como la huelga; así como los vinculados con el surgimiento de sus “formas degeneradas”.

realización de huelgas generales durante las administraciones radicales y negando o minimizando su existencia durante el gobierno justicialista.

Un rápido relevamiento de las imágenes construidas principalmente por los medios de comunicación masiva y los discursos políticos daría como resultado el registro generalizado de las 13 huelgas generales realizadas durante la administración radical (1983-89) y el “olvido” de las 9 huelgas generales realizadas durante la administración de Carlos Menem.

Estas imágenes parecen encontrar cierto asidero en el hecho de que durante el gobierno radical se convocaron, proporcionalmente, el doble de huelgas generales que durante el gobierno justicialista: en los cinco años y medio de gobierno radical, desde diciembre de 1983 hasta julio de 1989 (en realidad la última huelga se produjo en septiembre de 1988) hubo trece huelgas generales, con un promedio de poco más de dos huelgas por año; en diez años de gobierno justicialista (1989-1999) hubo nueve huelgas generales, o sea 0,9 de promedio anual. Y en los dos años del nuevo gobierno radical (1999-2001) hubo nueve huelgas generales, lo que promedia 4,5 huelgas por año. Pero los mismos datos muestran cuán lejos está de la realidad la imagen (alimentada tanto por radicales como menemistas) de que “durante el menemismo no hubo huelgas” y que éstas sólo se declaran durante los gobiernos radicales.

Cabe aclarar que dejar de lado la periodización según administración del gobierno no significa desconocer que desde hace cincuenta años la mayoría del movimiento obrero ha formado parte de la alianza social que se expresa políticamente en el peronismo, y que, por ende, se establece una diferencia cualitativa entre las huelgas generales realizadas durante una administración radical y las realizadas durante una administración justicialista, más aún si son declaradas contra políticas de gobierno. No es casual que no se declararan huelgas generales durante las presidencias de Perón (1946-52, 1952-55, 1973-74): la primera huelga general declarada durante un gobierno justicialista se produjo el 27 de junio de 1975, seguida de otra el 7 y 8 de julio, ambas durante la presidencia de Isabel Perón; tampoco es casual que la tercera huelga general en casi dieciséis años de gobiernos justicialistas se produjera contra el gobierno de Menem ni que a ella siguieran, durante el mismo gobierno, ocho más.

En el ejercicio de periodización que realizamos centramos la observación en las huelgas generales atendiendo a los grados de unidad y crisis de los cuadros económico profesionales de los obreros, y a los grados de aislamiento o alianza establecidos por el movimiento obrero organizado.

El momento histórico

El lapso comprendido entre 1983 y 2001 se ubica en un período contrarrevolucionario que tiene sus inicios a mediados de los '70. Pero dentro de este período pueden señalarse fases (como la que se corresponde con el gobierno militar y la que se corresponde con los gobiernos surgidos de procesos electorales) y también momentos de ascenso y descenso en la lucha de la clase obrera.

Las condiciones que se imponen a la clase obrera argentina en el desarrollo del período 1976- 2001 pueden sintetizarse en máxima jornada de trabajo con mínimo salario (disminuido no sólo en términos reales sino también nominales), despojo de condiciones conquistadas históricamente como la jubilación y el pago por despido, y el crecimiento de una masa de población sobrante para el capital, que va hundiéndose en la pobreza, consolidándose en la miseria. Es justamente la presión de esa masa, cuya parte totalmente desempleada se ha estabilizado en aproximadamente el doble de lo que fue su punto más alto hasta mediados de los '80⁵, lo que permite imponer las nuevas condiciones, en las que el 10% más rico de la población (que en 1975 recibía el 24% del ingreso total y en 1990 el 33,6%) recibe, en 1999, el 36,7% de ese ingreso mientras el 10% más pobre (que recibía el 3,2% en 1975 y el 2,1% en 1990) recibe apenas el 1,5%⁶.

Estas nuevas condiciones, y el discurso que pretende legitimarlas, comenzaron a imponerse con el golpe de estado de 1976, cuando el capital financiero se aseguró el control del gobierno para implementar las políticas (afines a sus intereses) necesarias para adecuar el país a las nuevas condiciones que imponía la caída de la tasa de ganancia y la consiguiente crisis económica en el mundo capitalista. Estas políticas incluían la disolución de la CGT, intervención de sindicatos, detención de dirigentes, secuestro y desaparición de militantes, presencia de tropas en las fábricas y la prohibición de “toda (...) medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción”, fundamentándolo en la necesidad de lograr “un efectivo aumento de la producción”⁷. El uso de la fuerza material logró anular parte de la legislación obrera, incrementar la productividad del trabajo y reducir los salarios. Pero, es bien sabido que si para algo no sirven las bayonetas es para sentarse sobre ellas.

El retorno en 1983 al sistema electoral requirió la vuelta a mecanismos legislativos que retacearan poder a los sindicatos, para mantener las condiciones en que se desarrollaban la producción y apropiación. Si durante los primeros meses que siguieron a la retirada del gobierno militar se produjo la devolución de las organizaciones sindicales, esto fue acompañado por el intento de disminuir su poder real. Al mismo tiempo un cierto crecimiento de los salarios fue pronto detenido por la proclamada “economía de guerra”, que los hizo retroceder.

Para mantener estas condiciones, era necesario liberar los mecanismos económicos que bajaran los salarios, aumentando la competencia entre los trabajadores y sometiéndolos a la constante amenaza de la pérdida de su fuente de medios de vida. Acompañado por el

⁵ Las tasas más altas de desocupación antes de 1986 rondaron el 6%. En la segunda mitad de la década de 1990 la tasa más baja de desocupación fue de 12,4 en 1998. (Fuente: Indec).

⁶ *Clarín*, 23/7/2000. Entre 1990 y 1999 la brecha de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico creció 57%; en 1990 el 10% más rico ganaba 15 veces más que el 10% más pobre; hoy gana 23,7 veces más.

⁷ Ley 21.261 del 24/3/76 en *Anales de Legislación Argentina*, tomo XXXVI-B, p.1033. También inciso b del artículo 1° de la ley 21.400 del 3/9/76.

“achicamiento del estado”, redefiniendo (no eliminando) su papel como regulador de la economía y pretendiendo reducir su lugar como empleador. El efecto inmediato de estas políticas fue el crecimiento de la desocupación, que permitía “concretar la estabilización” de las nuevas condiciones. Pero esto sólo pudo realizarse en la década de 1990.

Los '80 terminaron con las hiperinflaciones de 1989 y 1990, momento en que se desarticulaban todas las relaciones sociales al desaparecer su mediación en la sociedad capitalista, el dinero. Esa desarticulación, y la amenaza de su repetición, potenciaron las condiciones para que fuera el mercado el que impusiera peores salarios y condiciones de trabajo que permitían incrementar las ganancias.

Desde 1986 la desocupación y subocupación sumadas superaron la barrera nunca antes alcanzada del 12% de la Población Económicamente Activa. Pero el incremento fue mucho mayor a partir de 1991, hasta llegar al 30,9% (más de 4 millones de personas) en 1996, cuando la inversión y el crecimiento del PBI se encontraban en su apogeo. Situación que, con algunos momentos de leve descenso, se han mantenido hasta hoy, y cuyos efectos en las condiciones laborales y en los salarios no tardaron en hacerse notar: la jornada laboral de los que tienen empleo se extendió⁸, las condiciones laborales empeoraron⁹ y los salarios volvieron a disminuir¹⁰, mientras la productividad del trabajo crecía¹¹. Obviamente esto se reflejó en las condiciones de vida de la población¹².

Este es el contexto en que se desarrolla, contra la imagen que se ha pretendido imponer desde los beneficiarios de la situación, la lucha de la clase obrera, que ha recurrido no sólo a los “cortes de ruta” sino también a sus instrumentos tradicionales de lucha, como las 5 huelgas declaradas durante el gobierno militar¹³, las famosas 13 huelgas generales durante el gobierno de Raúl Alfonsín, las menos publicitadas pero no menos importantes 9 huelgas realizadas durante el gobierno de Carlos Menem (que lograron frenar por cuatro años la reforma laboral) y las 9 realizadas durante la administración de Fernando de la Rúa.

⁸ En 1989 el 33% de los ocupados trabajaba más de 45 horas semanales, en 1998 lo hacía el 42,5%, de los cuales el 15% trabaja más de 62 horas semanales.

⁹ El trabajo “en negro” creció en el Gran Buenos Aires del 26,7% en 1990 al 40% en el 2000; y en algunas provincias al 50,5%.

¹⁰ Los salarios industriales cayeron 18,5% y los de la construcción, 11,2%.

¹¹ Más de un 50% durante la década de 1990. Entre 1990 y 1999 el PBI creció más del 50,8%.

¹² En 1974 sólo el 5,8% estaba por debajo de la línea de pobreza; en el 2000 el 35%; en su mayoría asalariados o ex asalariados. Hoy se estima en más del 40%.

¹³ Durante el gobierno militar fueron declaradas huelgas generales el 27 de abril de 1979 (Comisión de los 25), el 22 de julio de 1981 (CGT), huelga con movilización del 22 de septiembre de 1982 (CGT-Brasil), 6 de diciembre de 1982 (CGT-Brasil y CGT-Azopardo) y el 28 de marzo de 1983. Esta última recibió más de 90% de adhesión, en medio de la retirada del gobierno militar. Además la CGT-Brasil organizó la marcha del 7 de noviembre de 1981 a la iglesia de San Cayetano y la movilización del 30 de marzo de 1982 atacada y dispersada por la policía en medio de corridas, choques callejeros con la policía que disparó gases y balas en Capital Federal, Mendoza, Rosario, Tucumán y Mar del Plata, dejando un muerto y numerosos heridos de bala.

Las huelgas generales entre 1984 y 1988

Transcurrió casi un año y medio desde la última huelga general realizada durante el gobierno militar y poco menos de un año desde que Alfonsín asumió la presidencia (10 de diciembre de 1983) hasta que se produjo la huelga general del 3 de septiembre de 1984; convocada por la CGT, sin movilización, contra la política socioeconómica del gobierno y la carestía y por aumento de salarios, fue apoyada por la Comisión de los 20, mientras la Mesa de Enlace Gremial (más cercana al gobierno) dejó en libertad de acción a sus miembros y algunos sindicatos (por ej. CTERA) se declararon en contra; tuvo un acatamiento parcial (50%), realizándose especialmente en los sectores industriales.

El 23 de mayo de 1985 se realizó una huelga general, declarada también por la CGT contra la política socio económica del gobierno; recibió la adhesión de organizaciones empresarias (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias –CAME-, Confederaciones Rurales Argentinas –CRA-) y de los partidos políticos de la oposición oficial y de la izquierda¹⁴, mientras se oponía el partido oficialista¹⁵; a pesar de las promesas de sanciones a los huelguistas por parte del gobierno, que además desconoció a la CGT, el paro tuvo un apoyo total, y fue acompañado por una movilización a Plaza de Mayo de la que participaron alrededor de 120.000 personas.

El mismo año, el 29 de agosto, se realizó una nueva huelga general convocada por la CGT en favor de su propuesta socioeconómica, que incluía una moratoria en el pago de la deuda externa, y contra el Plan Austral y el FMI; recibió el apoyo de los partidos de la oposición oficial y de la izquierda, así como de organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones empresarias, y el rechazo del partido oficialista; nuevamente el gobierno anunció sanciones contra los huelguistas (descuento a los estatales) pero el paro tuvo un amplio acatamiento y la movilización reunió a unas 120.000 personas.

Comienza a transitarse aquí el momento de mayor grado de unidad y menor aislamiento.

Retirada la CGT de la Conferencia Económica y Social y fracasado el Plan Austral, se realizó el 21 de enero de 1986 un nuevo paro general, declarado por la CGT, sin movilización, por un cambio en la política socioeconómica, reclamando un aumento salarial del 30% y la negociación de la deuda externa. Recibió la adhesión de casi todas las organizaciones sindicales y los partidos políticos¹⁶, excepto el oficialismo, así como de organizaciones de derechos humanos¹⁷, de ex combatientes de Malvinas, de la iglesia católica y de algunas organizaciones empresarias (CAME, A.I.Textiles). Tuvo un alto acatamiento.

¹⁴ Partido Justicialista (PJ), Demócrata Cristiano (PDC), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Conservador Popular (PCP); Intransigente (PI), Obrero (PO), Movimiento al Socialismo (MAS), Socialista Auténtico (PSA).

¹⁵ Unión Cívica Radical (UCR), Juventud Radical (JR).

¹⁶ PJ, PDC, MID, PCP, Movimiento Nacionalista Constitucional (MNC), Juventudes Políticas, PI, Frente de Izquierda Popular (FIP), Izquierda Nacional (PIN), ALN, Unidad Socialista (US), Comunista (PC), PO, MAS, PSA.

¹⁷ Familiares de Detenidos Desaparecidos, Madres de Plaza Mayo, Servicio de Paz y Justicia.

El 25 de marzo, fracasadas nuevamente las negociaciones salariales, la CGT convocó a la segunda huelga del año, contra la política socioeconómica del gobierno y por un aumento de salarios; recibió la adhesión de una parte de los partidos de la oposición oficial y de la izquierda¹⁸ y de organizaciones de derechos humanos¹⁹; pero otra parte de los partidos políticos se unió al oficialismo explicitando su rechazo²⁰; la movilización reunió a alrededor de 150.000 personas.

Aunque se mantiene el alto grado de unidad y bajo grado de aislamiento, en esta huelga comienza a manifestarse el alineamiento de otras fracciones sociales que acompañan públicamente al gobierno en contra de la acción del movimiento obrero.

El 12 de junio de 1986 una nueva huelga general convocada por la CGT por aumentos salariales y contra el Plan Austral en su primer aniversario, siguió a un nuevo fracaso de las negociaciones salariales; nuevamente recibió el apoyo de los principales partidos de la oposición y de los de izquierda y el rechazo del oficialismo y otros partidos²¹; fue de acatamiento parcial: fuerte en la industria, menor en el comercio y los bancos.

El 9 de octubre se realizó la cuarta huelga general de 1986, declarada por la CGT contra la política socioeconómica, en el contexto del proceso de "normalización" de la central obrera y de los conflictos entre líneas político sindicales a que esto daba lugar; la huelga recibió un tibio apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas y el transporte (ferroviario y automotor) sólo paró simbólicamente, y en general tuvo un acatamiento menor. Expresaron su adhesión la mayoría de los partidos de la oposición oficial y la izquierda²², que tuvo una importante presencia en la movilización convocada a Plaza Mayo, donde se reunió a un número notablemente menor de manifestantes que en las anteriores²³. El partido gobernante manifestó su oposición.

Aquí puede observarse el comienzo de una fractura en los cuadros sindicales, que se expresa también en una caída en el acatamiento a la huelga general y, sobre todo, en el número de manifestantes convocados a la movilización, que ya no alcanzará más las cifras de las movilizaciones anteriores. Debe recordarse que 1986 es el año en que la desocupación y subocupación comienzan a romper su techo histórico.

El 26 de enero de 1987, en el contexto de la discusión de acuerdos salariales con empresas, por rama, la CGT declaró una huelga general por 24 horas, sin movilización, contra la

¹⁸ PJ, PDC, PI, FIP, Socialista Democrático (PSD), Socialista Popular (PSP), PC, MAS, Confederación Socialista (CSA), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Comunista Revolucionario (PCR).

¹⁹ Madres de Plaza de Mayo.

²⁰ UCR, Unión del Centro Democrático (UCD), Federal (PF), Demócrata (PD).

²¹ UCR, Demócrata Progresista (PDP).

²² PJ, PI, PDP, PDC, MID, PSP, PC, MAS.

²³ A partir de esta movilización, las cifras de participantes que dan los organizadores y los diarios comienzan a diferir drásticamente, siendo la segunda alrededor de un 10% de la que estima la CGT. Aunque las cifras de los organizadores tienden a exagerar el número de movilizados, los diarios tendieron a minimizarlo (algo que hasta entonces no ocurría, aunque las cifras tuvieran diferencias), hasta el punto de dar cifras menores a las que daba la policía. En todo caso, la disminución en el número de manifestantes fue notable.

política socioeconómica del gobierno, por los “26 puntos”, que incluían el pedido de moratoria de la deuda externa, y el pacto social; recibió la adhesión de la oposición oficial (PJ) y la izquierda, y el rechazo del partido gobernante. Tuvo un acatamiento parcial, mayor en la industria y menor en comercio y bancos, pero superior al 70%.

El grado de fractura entre los cuadros sindicales se incrementó en 1987, con la incorporación al gobierno como ministro de Trabajo del dirigente sindical justicialista Carlos Alderete, durante cuya gestión no se produjeron huelgas generales. La estrepitosa derrota electoral del partido del gobierno el 6 de septiembre, que le significó la pérdida de gobiernos provinciales (incluyendo el de Buenos Aires) y de la mayoría en la Cámara de Diputados, alejó a Alderete del gabinete.

El 4 de noviembre, en el contexto de las reuniones organizadas por el gobierno para llegar a un “pacto social”, la CGT convocó a una nueva huelga general de 10 horas, con movilización, contra la política socioeconómica del gobierno, exigiendo aumentos salariales y la renuncia del equipo económico. Recibió la adhesión de los partidos de la oposición oficial y la izquierda, incluyendo una explícita declaración de las Juventudes Políticas; mientras el partido de gobierno y los liberales se manifestaron en contra. El paro fue parcial (mayor en la industria, transporte y bancos, reducido en el comercio) y la movilización²⁴ convocó, según las fuentes periodísticas, a alrededor de 15.000 personas.

Un mes después, el 8 y 9 de diciembre, se realizó un nuevo paro general convocado por la CGT, por 34 horas, con movilización a San Justo (La Matanza), de la que participaron alrededor de 20.000 personas y en la que, por primera vez, no participó el conjunto de los partidos de izquierda²⁵, ni tampoco se publicó adhesión del partido Justicialista. El paro fue parcial²⁶ y el acto fue descrito como “netamente obrero”, “de trabajadores rasos”.

Es decir, se marca aquí un nuevo grado de aislamiento de los obreros, que se revierte, en parte, en la siguiente huelga general.

El 14 de abril de 1988, el mismo día en que el gobierno promulga la Ley de Asociaciones Profesionales, fuertemente rechazada por las entidades empresarias, especialmente por el reconocimiento del “fuero sindical”, se realizó una huelga sin movilización convocada por la CGT, con la adhesión de los partidos de la oposición oficial y de la izquierda y el rechazo del partido de gobierno, los liberales y organizaciones empresarias²⁷. El mismo día el sindicato docente comenzó una huelga por tiempo indeterminado.

²⁴ De la que no participaron ni el gobernador electo por el opositor PJ, Antonio Cafiero, ni el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel.

²⁵ Se hicieron presentes el partido Intransigente, el Peronismo Revolucionario y el partido Socialista Auténtico, pero no el partido Comunista, el Movimiento al Socialismo y otros.

²⁶ Tuvo un acatamiento del 80 a 90% en la industria y fue menor en comercio, bancos y transporte, por lo que los diarios lo consideran “menor” que los anteriores.

²⁷ Unión de Entidades Comerciales Argentinas, Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Sociedades Anónimas e incluso CAME que apoyó huelgas anteriores y posteriores.

Cuatro meses después la CGT convoca a una huelga general con movilización, durante ocho horas (entre las 12 y las 20)²⁸ del 9 de septiembre, contra el Plan Primavera, por el cambio en democracia, contra la liquidación del patrimonio nacional y el desvío de ingresos a la usura extranjera. Apoyan organizaciones empresarias (Federación Agraria Argentina –FAA-, cuyo presidente es orador en el acto, Confederación General Económica –CGE-) y partidos de la oposición oficial (PJ, PDC, PCP, PI, PSP) y de izquierda (PC, y parcialmente, ya que no concurren al acto, al que definen como partidario, MAS y PO). Los dirigentes sindicales (y también los políticos justicialistas) están divididos entre “renovadores”, que en el campo sindical tienen por dirigente a Saúl Ubaldini, y “ortodoxos”, que siguen a Menem (“los 15”), y que son reticentes a participar del acto. Esta huelga se realiza en el contexto de la campaña para la elección presidencial del año siguiente y desde días antes los diarios publican que a la movilización irán grupos para hacer disturbios y perjudicar al candidato justicialista Menem; éste, después de prometer su asistencia y declinar ser orador, no participa del acto en Plaza de Mayo. Efectivamente durante el acto, que reúne a 20.000 personas, se producen incidentes, que dejan 50 heridos internados en hospitales, y saqueos de algunos comercios; los incidentes son atribuidos por el gobierno a enfrentamientos entre los manifestantes, producidos por la “ultraizquierda”, pero a medida que pasan los días crece la sospecha de que han sido organizados por servicios de inteligencia. Si bien la participación en la movilización es un poco superior a las de las huelgas anteriores, las fuentes periodísticas no dan información sobre el alcance de la huelga, centrándose en los incidentes y saqueos.

Inmediatamente la CGT convoca a una huelga general sin movilización contra la represión policial, para el día 12. Y lo hace en el momento de mayor división de sus cuadros y aislamiento social: se declaran contra la huelga los “15” y otros dirigentes sindicales, el PJ Capital, el partido oficialista (UCR), los liberales (UCD, PD, PDP), pero también algunos de la oposición oficial que habitualmente acompañaron las huelgas anteriores (PSP, PDC, MID), y organizaciones empresarias (Unión Industrial Argentina - UIA, CAME, FAA); sólo aparecen adhiriendo el PJ y el PTP. El paro es menor que los anteriores pero a pesar de la división y el aislamiento el acatamiento ronda el 60%.

Este es el momento de menor grado de unidad y mayor aislamiento social de los obreros desde 1984.

De manera que lo que puede observarse entre 1984 y 1988 es un momento ascendente (mayor unidad y menor aislamiento) que se prolonga desde los finales del gobierno militar; 1986 se constituye en un punto de inflexión: en marzo comienzan a expresar su alineamiento en contra de la lucha de los obreros algunas fracciones sociales y en la última huelga del año puede observarse el comienzo de una fractura en los cuadros sindicales, que se expresa también en una caída en el acatamiento a la huelga general y, sobre todo, en el número de movilizados. El grado de fractura

²⁸ En la mayoría de las provincias se prolongó durante 24 horas.

entre los cuadros sindicales se incrementó en 1987, y aunque la huelga de noviembre pareció revertirla, la última huelga del año mostró un mayor aislamiento de los obreros. Finalmente fractura y aislamiento social señalan la última huelga general, en septiembre de 1988.

El comienzo de 1989 encuentra a los obreros en el momento de menor grado de unidad de sus cuadros económico profesionales y de mayor aislamiento respecto de otras fracciones sociales.

Debe tenerse presente, sin embargo, que el acatamiento a la huelga general entre 1984 y 1988 nunca fue menor al 50% de los trabajadores.

Descomposición, hiperinflación, revuelta y hegemonía del capital financiero: 1988-1992

Durante más de cuatro años, entre septiembre de 1988 y noviembre de 1992 no se producen huelgas generales. En el contexto de la situación descrita en el final del punto anterior se suman otros elementos políticos.

Durante la debacle del Plan Primavera con que se inicia 1989, la hiperinflación y sus efectos sociales (la revuelta²⁹), la CGT no declara ninguna huelga general, para "no contribuir al estallido social".

La caída del gobierno radical y el ascenso del nuevo gobierno contribuyen también a inhibir las huelgas generales: la mayoría del movimiento obrero organizado forma parte de la alianza que toma el gobierno. Aunque hay numerosas huelgas por rama, contra despidos y privatizaciones, serán necesarios más de tres años para que el movimiento obrero organizado vuelva a usar el instrumento de la huelga general.

Pero esta ausencia se asienta también en la desarticulación de relaciones sociales que produjeron las hiperinflaciones de 1989 y 1990, y que se sumó a las producidas anteriormente por la llamada guerra antisubversiva, la guerra de Malvinas y la manera en que se desarrolló la salida electoral de 1983.

1989/90 constituye un hito en el desarrollo de la historia argentina reciente, que coincide con el cambio de gobierno. Con la hiperinflación se crean las condiciones para la aplicación con toda contundencia de la política de la oligarquía financiera en el gobierno desde 1976.

En el primer momento que sigue a la revuelta lo que caracteriza a esa política es, en gran medida, la privatización de empresas estatales, con su efecto de "retiros voluntarios" y despidos de asalariados. Sin embargo, esos efectos sobre los trabajadores, que poco después se manifestaron en el incremento de la desocupación (abierta o encubierta) y la disminución de los salarios (como relación entre lo pagado por la fuerza de trabajo y el desgaste que se hace de ella, es decir

²⁹ Producida entre mayo y julio de 1989 y febrero y marzo de 1990. Los saqueos de comercios, y en mucho menor proporción ollas populares y manifestaciones no alcanzaron a constituirse en protesta ni se dirigieron contra el estado o el gobierno, limitándose a ser, principalmente, un choque entre particulares. Iñigo Carrera, N., Cotarelo, M.C., Gómez, E. y Kindgard, F.; *La Revuelta. Argentina 1989/90*; Buenos Aires, PIMSA, Documento de Trabajo N°4, 1995.

incluyendo las condiciones en que se trabaja, duración de la jornada y productividad) no fueron evidentes en un primer momento: la nueva situación que se pretendía imponer contó con el consenso de buena parte de la sociedad, incluyendo a muchos de los mismos trabajadores de las empresas privatizadas; y los intentos de resistencia³⁰ estuvieron enmarcados en un relativo aislamiento social.

De manera que la revuelta de 1989/90 y los años que la siguen se mantienen dentro del momento que caracterizamos como descendente.

A fines de 1993, con el motín de Santiago del Estero³¹, podemos señalar un punto de inflexión en el movimiento de protesta. Esto no significa que se cierre el período contrarrevolucionario que se inició a mediados de la década de 1970. Pero dentro de ese período aparecen indicios del inicio de un nuevo momento. El régimen político en su conjunto cierra filas contra el motín, mientras que, por el contrario, en distintas luchas los trabajadores se refieren al mismo como un "ejemplo" a seguir³². En ninguno de los hechos encontramos desarrollada una política "consciente", en el sentido que apunte a la superación de raíz de las causas del estado en que se encuentran las fracciones sociales involucradas (y por ello se localizan dentro de lo "espontáneo"), pero pueden señalarse diferencias entre ellos que muestran un avance desde formas no sistemáticas a formas sistemáticas.

El motín de 1993 señala, como dijimos, que ha comenzado un momento ascendente de las luchas de la clase obrera y el pueblo. A la vez, se observa que, a diferencia de las luchas producidas antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores logran, si no evitar la aplicación de políticas de gobierno que apuntan a eliminar conquistas históricas, al menos evitar que se apliquen de la manera y con la velocidad con que la oligarquía financiera pretende. También puede observarse que en el motín de 1993 y en algunos de los cortes, se pone en evidencia una ruptura en la relación pueblo-representantes.

Las huelgas generales de 1992-99

Una primera mirada permite observar que en la década del 90 se han registrado 9 huelgas generales declaradas por una o varias de las organizaciones que agrupan a sindicatos o agrupaciones sindicales: Confederación General del Trabajo (CGT), Congreso (después Central)

³⁰ Por ejemplo, la llamada "Plaza del No", las huelgas de los trabajadores ferroviarios y telefónicos o el corte de ruta de los trabajadores de Hipasam en Sierra Grande en 1991.

³¹ El motín del 16 y 17 de diciembre de 1993 se produce en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda. En su transcurso son incendiadas las sedes de los tres poderes y las casas de dirigentes políticos. Ver Cotarelo, María Celia; *El motín de Santiago del Estero, diciembre de 1993*; PIMSA, Documento de Trabajo N°19, 1999.

³² Entre los hechos que suceden al motín de Santiago del Estero hay manifestaciones callejeras, algunas de las cuales presentan elementos del *motín*, como el ataque a las sedes de gobiernos provinciales y municipales y residencias de dirigentes políticos (La Rioja 1993; Jujuy 1994; Salta 1994); .desde 1995 se multiplican los hechos de este tipo.

de los Trabajadores Argentinos (CTA), Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), Corriente Clasista y Combativa (CCC), 62 Organizaciones Peronistas (62OP).

Desde su asunción en 1989 el gobierno mantuvo la expectativa del “salariazó” y la “revolución productiva” hasta que se hizo evidente su subordinación absoluta a la política del gran capital transnacionalizado e internacional encarnado en la figura del ministro Domingo Cavallo (cuyo plan es votado por el Congreso Nacional el 23 de marzo de 1991).

La primera huelga general se realizó el 9 de noviembre de 1992, durante el momento que hemos caracterizado como descendente, declarada por una parte de los cuadros obreros y en un relativo aislamiento: fue convocada por la CGT, con el apoyo de algunos sindicatos vinculados al CTA y de partidos de izquierda, pero con la oposición de la CTERA, del partido gobernante (PJ), de una parte de la oposición oficial (Fredejusó) y la indefinición de otra parte de esa oposición (UCR). A pesar de ello tuvo un acatamiento de entre un 50 y un 75%, especialmente en los cordones industriales de las grandes ciudades. La huelga fue convocada en defensa de las convenciones colectivas de trabajo y de los jubilados, reclamando “que el sacrificio sea parejo” y por el acceso a la educación y salud.

En 1994 una parte del movimiento obrero organizado sindicalmente protagonizó la Marcha Federal contra la política económica, la flexibilidad laboral y el pacto fiscal. Para ese momento ya se habían producido varios motines populares, protagonizados principalmente por empleados de las administraciones públicas provinciales, docentes y trabajadores de la salud afectados por el atraso en el pago de salarios, despidos y reducciones salariales. La Marcha Federal se desarrolló a lo largo de diez días (desde el 3 al 12 de julio), en los que cuatro columnas regionales, provenientes de la Patagonia, el Litoral, el Noroeste y Cuyo convergieron sobre Buenos Aires para el acto central realizado en la Plaza de Mayo, donde se reunieron 50.000 personas. Esta marcha fue convocada no sólo por organizaciones obreras (CTA, MTA, CCC) sino también de pequeños y medianos empresarios (FAA, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa –APYME-, Fedecámaras, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos –IMFC-); recibió la adhesión de otras entidades obreras (seccionales de gremios y regionales de la CGT), de partidos políticos tanto de la oposición oficial (UCR, Frente Grande -FG-) como de la izquierda (PC, PO, US, MAS, Corriente Grande -CG-) y organizaciones de derechos humanos.

En este contexto de mayor unidad de los cuadros sindicales y menor aislamiento de los obreros, dos semanas después, el 2 de agosto de 1994, se realizó una huelga general por 24 horas, convocada por el CTA y el MTA contra la política económica y social del gobierno. Éste pretendió reducir su alcance declarándola ilegal, medida que recibió el repudio de la CGT (aunque no participaba de la huelga). Esta huelga recibió un acatamiento parcial, con mayor adhesión en el interior del país.

En 1995 los efectos de la política gubernamental se hacían notar en la sociedad argentina. En lo que hace al movimiento huelguístico se puede observar una creciente unidad en la acción de

los cuadros sindicales. El 21 de abril se realizó una huelga general por 24 horas, convocada por el CTA y el MTA contra la política económica y social del gobierno y en repudio por la muerte del obrero Víctor Choque en Ushuaia, durante la represión de una movilización contra despidos. Si bien la CGT tampoco adhirió a esta huelga, uno de sus sindicatos importantes, la Unión Obrera Metalúrgica, realizó una huelga el mismo día.

El 6 de septiembre se realizó otra huelga general por 12 horas con movilización (Marcha del Trabajo) convocada por la CGT por la plena ocupación, contra la política económica, el desempleo y para garantizar el funcionamiento de las obras sociales. Adhirieron la CTA y MTA, entidades empresarias (CAME, CGE), partidos políticos de la oposición oficial (Frente Grande y, con reticencias, la UCR) y de la izquierda. Si bien fue parcial en Buenos Aires, donde, sin embargo, más de 60.000 personas se hicieron presentes en la concentración en la Plaza de los Dos Congresos, la huelga fue casi total en Córdoba, San Juan y Santa Fe e importante en otras provincias.

Entre el 18 y el 20 de noviembre la “Mesa de Enlace” del sindicalismo opositor (formada por CTA, MTA, CCC y la regional San Lorenzo de la CGT) y apoyada por el Congreso del Trabajo y la Producción (que nuclea a organizaciones de la pequeña y mediana empresa y la Federación Universitaria Argentina –FUA-), partidos de la oposición oficial (Frepasso, UCR, Modin) y de la izquierda, convocó a una Jornada de Protesta Nacional de tres días contra la política económica y social del gobierno.

En 1996 se alcanzó el momento de mayor unidad de los cuadros sindicales: todos los nucleamientos sindicales convocaron a tres huelgas generales, que fueron las más importantes de la década. La CGT, la CTA y el MTA convocaron a parar por 24 horas el 8 de agosto, con el apoyo de de la oposición oficial (la UCR y el Frepasso) , partidos de izquierda, organizaciones estudiantiles (la FUA); la CTA convocó además a movilizarse y el MTA organizó ollas populares que fueron desalojadas por la policía, que detuvo a algunos participantes. Esta huelga, convocada contra la reducción de asignaciones familiares y la política impositiva en relación con el pago de sueldo en tickets, fue masiva.

El 26 y 27 de septiembre se realizó la segunda huelga general del año, convocada por 36 horas por la CGT (que incluía en ese momento al MTA), con la adhesión de la CTA, con movilización a Plaza de Mayo. Recibió el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo y de Hijos, de partidos de izquierda y también de los partidos de la oposición oficial y hasta de diputados del mismo partido de gobierno (PJ), así como la FUA; también de centrales sindicales de Brasil y Uruguay, la CIOSL y la CMT. Fue masiva, sobre todo en el interior, mientras que en la Plaza de Mayo se reunieron más de 70.000 personas. Esta movilización constituyó el acto de protesta más numeroso contra el gobierno del Dr. Menem³³.

³³ La única movilización de la década que reunió un número mayor de participantes fue la marcha de repudio al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, realizada en marzo de 1996.

Se produce aquí el momento de mayor unidad y menor aislamiento del movimiento obrero en la década. Por tanto el momento más alto del movimiento huelguístico.

El 18 de noviembre la CGT amenazó con declarar una huelga general por tiempo indeterminado, lo que obligó al gobierno a detener los cambios en la legislación laboral y negociar con una parte de los dirigentes sindicales (CGT) mientras los cuadros políticos e ideológicos del gran capital, que lo habían halagado hasta ese momento comenzaban a referirse a las “tareas pendientes” o “deberes inconclusos del gobierno”. La huelga de septiembre y la amenaza de noviembre debilitaron al gobierno.

La huelga general del 26 de diciembre de 1996, por 24 horas sin movilización, convocada por la CGT, con la adhesión del CTA y el MTA, en protesta por los decretos de flexibilización laboral, fue rechazada por algunos dirigentes menemistas; tuvo una adhesión parcial, aunque importante en los cordones industriales del GBA y Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mar del Plata.

Cabe destacar que las huelgas y movilizaciones de 1995 y 1996 se producen en el momento en que es mayor la presión que ejerce la superpoblación obrera sobre el activo obrero: las mayores huelgas generales se producen cuando los índices de desocupación y subocupación alcanzan sus valores más altos, sumando a casi el 30% de la población económicamente activa. Debe destacarse también que esa adhesión se realiza a pesar de las intimaciones y declaración de ilegalidad por parte del gobierno en los primeros paros.

La fractura en los cuadros del movimiento obrero, que había comenzado a vislumbrarse en 1996, se desarrolló en 1997, a pesar de lo cual se realizaron dos grandes movilizaciones que fueron el prelude del paro del 14 de agosto.

La muerte de Teresa Rodríguez por la policía, en Neuquén, dio lugar a dos manifestaciones de repudio del movimiento obrero dividido: el 14 de abril la CTERA realizó un paro, movilización y acto en Plaza de Mayo, con el apoyo de la CTA, el MTA y otros sindicatos³⁴, la FUA y varios centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos y de jubilados, partidos de izquierda, dirigentes de la oposición oficial (el Frepaso y la UCR) y personalidades de la cultura y del deporte, que reunió a más de 20.000 personas. Por su parte, la CGT declaró tres días después (17 de abril) una Jornada Nacional de Duelo, que consistió en un paro de 1 hora por turno, recibiendo la adhesión de la CTA mientras el MTA rechazaba la medida reclamando una huelga de 24 horas.

La otra movilización fue la Marcha Nacional por el Trabajo, desde La Quiaca a Buenos Aires, que se desarrolló entre el 9 y el 11 de julio. Aquí la fractura en los cuadros sindicales fue evidente: fue convocada por la CCC, el MTA, la CTA y la FUA, contra el acuerdo laboral firmado por la CGT y el gobierno; recibió apoyo de las “62 OP”, la UTPBA, los partidos de la oposición

³⁴ ATE, (estatales) UTPBA (trabajadores de prensa), Asociación Judicial Bonaerense, UTA (transporte), trabajadores del Instituto Malbrán.

oficial (UCR, Frepaso, Nueva Dirigencia –ND-), partidos de izquierda, varios obispos (de Humahuaca, Quilmes, Santiago del Estero y Zárate-Campana) y las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y reunió en Plaza de Mayo no menos de 50.000 personas.

La única huelga general de 1997, el 14 de agosto, mostró no sólo la fractura en el movimiento obrero sino también el creciente aislamiento en que lo dejaban los partidos de la oposición oficial, incluyendo sus organizaciones estudiantiles³⁵. Fue convocada contra el modelo socio económico y los proyectos de flexibilización, por la CTA, el MTA, la CCC, la Unión Obrera Metalúrgica -UOM (a pesar de formar parte de la CGT, que no adhirió a la huelga) y las 62 Organizaciones Peronistas, y recibió el apoyo de los partidos de izquierda; se manifestaron en contra la CGT y el PJ, mientras no se definió la Alianza UCR-Frepaso. Se realizó por 24 horas con movilizaciones, actos, treinta ollas populares y veinte cortes de ruta en el interior del país, que el gobierno pretendió controlar con la policía, lo que dio lugar a choques que dejaron heridos y presos.

En 1997 la fractura y el creciente aislamiento hacen evidente que se ha entrado en un momento descendente del movimiento huelguístico³⁶. Al año siguiente no hubo huelgas generales.

Y en 1999 sólo una, el 6 de julio, convocada por la CTA por 24 horas con movilización (Jornada de Protesta Nacional), repudiando la política socioeconómica del gobierno, reclamando trabajo para todos, por un millón de puestos de trabajo, reducción de la jornada laboral y subsidio a los desocupados. Recibió el apoyo de la FUA, la Federación Agraria y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pero su mayor repercusión estuvo dada porque coincidió con un lock out de transportistas. Aunque fue parcial, hubo cortes de rutas con incidentes, y manifestaciones en muchas ciudades del interior y en la Capital.

Las huelgas generales de 2000 - 2001

El enfrentamiento social que sigue al corte (toma y defensa) del puente General Belgrano, que une Corrientes con Resistencia, inmediatamente después del cambio de gobierno en diciembre de 1999, aparece como indicador de un cambio de tendencia que se confirma al observar las huelgas generales del año 2000. Contra lo que suele afirmarse en el discurso político, las huelgas generales en 2000 y 2001, después del cambio de gobierno, no significaron una ruptura sino una continuidad con las realizadas durante la administración anterior, de la misma manera que la política socioeconómica del nuevo gobierno fue la exacta continuidad del anterior.

³⁵ Tanto la fractura entre los cuadros sindicales como el creciente aislamiento de la lucha obrera respecto de otras fracciones sociales puede vincularse con el comienzo de las campañas electorales para definir la sucesión presidencial en 1999. En 1997 se constituyó la Alianza integrada por los principales partidos de la oposición oficial que, desde ese momento tendieron a retacear su apoyo a las huelgas y movilizaciones.

³⁶ Y no sólo del movimiento huelguístico: algo similar se verifica si se observan los llamados "cortes de ruta". Ver Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia; *La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización.*; PIMSA, Documento de Trabajo N°27, 2000.

Pero, además, el nuevo gobierno intentó aprovechar la legitimidad de su reciente elección para avanzar en la flexibilización laboral exigida por el poder económico y detenida desde 1996 por la resistencia de los trabajadores. Su pírrica victoria, con la aprobación de la ley en medio de acusaciones y admisiones de sobornos en el Senado, constituyó uno de los primeros signos de su pérdida de legitimidad. Ese es el contexto específico de estas huelgas.

Después de tres movilizaciones, dos contra la ley de reforma laboral y una contra la represión policial³⁷, se realizó la huelga general del 5 de mayo de 2000, convocada el 25 de abril, durante la movilización de 20.000 personas, frente al Congreso Nacional. Fue convocada por la CGT (secretaría Moyano) con apoyo de la CTA y de la CCC, no así de la CGT (secretaría Daer), aunque algunas de sus regionales dejan en libertad de acción a los sindicatos miembros. Reclaman la convocatoria al Consejo del Salario para fijar un aumento del salario mínimo, vital y móvil, la recomposición de los salarios básicos de los convenios colectivos, la eliminación total del IVA a los bienes que integran la canasta básica y el inmediato otorgamiento de un subsidio para un millón de jefes de hogar y el aumento de las jubilaciones mínimas. Apoyan los partidos de izquierda, el Movimiento de Agrupaciones Peronistas y el Movimiento Nacional de la Tercera Sección Electoral (Lanús). Aunque convocada sin movilización y a pesar de la amenaza del gobierno, que anunció medidas contra los cortes de ruta, caracterizados como delito, hubo cortes en Avellaneda (de estudiantes y desocupados), La Matanza (desocupados), Puente de La Noria (jubilados), Mar del Plata (desocupados), San Lorenzo (ocupados), Ensenada (estatales y transporte), González Catán (desocupados), Tucumán (viales, azucareros y municipales) y Jujuy; también hubo amenazas e intentos de saqueos a supermercados (Mar del Plata), manifestaciones y actos (Rosario, Ushuaia, Cipolletti, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Mendoza) e intentos de ollas populares en Salta (asalariados ocupados), con corridas y choques callejeros con la policía. Las cifras de acatamiento dadas por el gobierno y la CGT son totalmente dispares (33,31% y 85% respectivamente).

Las huelgas comienzan, pues, con un mayor grado de unidad en la acción de los cuadros sindicales, con la excepción de la CGT (Daer), pero con un importante grado de aislamiento. Pero la tendencia es a una mayor unidad en la acción, aunque se utilicen distintas modalidades de la huelga, y menor aislamiento, tal como lo muestra la siguiente huelga.

El 9 de junio se realizó una huelga general en repudio a la política socioeconómica en general y contra el ajuste y la desregulación de las obras sociales dispuestos por el gobierno días atrás. Fue convocada por la CGT (Daer), sin movilización ni cortes, por la CGT (Moyano), con movilización, por la CTA, en el marco de un Plan de Lucha, y por la CCC, con movilizaciones y

³⁷ El 19 de abril la segunda movilización, en la que participaron partidos de izquierda y organizaciones estudiantiles, fue baleada por la policía resultando cuatro heridos de bala, treinta por balas de goma y cuarenta y nueve detenidos. Al día siguiente se realizó otra "contra la represión", en la que estuvieron presentes el PO, Izquierda Unida, la Corriente Clasista y Combativa y un vocero de Aldo Rico.

cortes. Recibió el apoyo de las 62 Organizaciones, de entidades empresarias (CAME), de agrupaciones peronistas y partidos políticos alineados en la corriente Nacional y Popular de la Tercera Sección Electoral, de la Coordinadora Nacional de la Izquierda Unida, de la Unión Network Internacional, que representa a 15 millones de trabajadores y 140 organizaciones obreras de distintos países del mundo, que hicieron conocer una declaración en Ginebra. Se manifestaron en contra del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el cavallismo. El paro fue rotundo en la industria, los principales servicios, el transporte y en las grandes ciudades del interior, como Córdoba y Rosario; el gobierno reconoció una adhesión del 60% y las centrales obreras entre 85 y 90%. En el marco de esta huelga hubo ataques a una empresa en Neuquén, pedradas a bancos en Rosario y Avellaneda, cortes de rutas y calles en Cruz del Eje, Santa Fe, Rosario, La Plata, Ushuaia, Jujuy y Gregorio de Laferrere (GBA); también piquetes, quema de neumáticos, rotura de vidrieras y bloqueo de accesos a la Capital.

Esta huelga fue precedida por la Marcha contra el FMI realizada el 31 de mayo, a Plaza de Mayo, convocada por la CGT (Moyano) y a la que habían adherido la CTA, un representante de la iglesia católica³⁸, y numerosos dirigentes políticos de un amplísimo espectro³⁹. Además de la concentración en Buenos Aires hubo marchas en Neuquén, Córdoba, San Juan, La Rioja, Bahía Blanca, Chaco, Jujuy, Santa Cruz, Rosario, Mar del Plata, Misiones, Mendoza, Río Negro; también tomas de facultades e intendencias y paros en éstas y otras provincias y ciudades.

El 23 y 24 de noviembre se realizó el paro por 36 horas convocado por la CGT (Moyano) y la CTA, con adhesión de la CCC. La CGT (Daer) convocó al paro sólo para el 24. Todos lo hacen para repudiar la presencia de una misión del FMI, que debió suspender su viaje, y reclamar un cambio de rumbo en el modelo económico y mayores incentivos a la producción. El acatamiento al paro fue muy grande, en medio de “un clima de pesado malestar social”, y el segundo día hubo sólo una muy limitada actividad comercial y ninguna industrial, de transporte y educativa; los organizadores estimaron un acatamiento superior al 90%. Además de cortes de rutas y accesos en Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Salta, Jujuy, Chaco (donde es muerto un piquetero), Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza y Santa Fe, hubo cortes de vías férreas en

³⁸ Guillermo García Caliendo.

³⁹ Desde la oposición oficial (PJ) (intendentes de La Plata, Moreno, La Matanza y Hurlingham, el Grupo Federal del Norte, seis intendentes de Entre Ríos, el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, el ministro de Gobierno bonaerense Raúl Otacehé, el peronismo bonaerense con Chiche Duhalde y varios intendentes del conurbano a la cabeza; Aldo Rico, Moisés Ikonikoff, Fernando Galmarini, Herminio Iglesias y los Montoneros) hasta el líneas del partido del gobierno (Alianza UCR-Frepaso) (Franja Morada, FUA, diputados aliancistas como Elisa Carrió, Alicia Castro, Alfredo Bravo, Héctor Polino, Marcela Bordenave, Jorge Rivas, Ramón Torres Molina y Gustavo Cardessa, legisladores porteños frepasistas como Eduardo Jozami, María Elena Naddeo y Dora Barrancos; Alfonsín no convocó pero tampoco se expidió en contra). Desde la izquierda (Izquierda Unida, el Foro Social orientado por el cura Farinello, el Perro Santillán, anarquistas, MST, PO, MAS, PTP, PTS, Patria Libre, Partido Humanista, PSA) hasta simpatizantes de Seineldín, Luis Patti, diputados cavallistas como Franco Caviglia y Fernanda Ferrero y belicistas como María Laura Leguizamón, Víctor Santa María y Guillermo Oliveri. También ocho organismos de derechos humanos y Hebe de

varios puntos del país, especialmente en los alrededores de Buenos Aires, por parte de los trabajadores ferroviarios que obligaron a las empresas a suspender los servicios. También hubo manifestaciones en Mar del Plata y Córdoba; cortes de ruta y calles en Mar del Plata, La Plata, Dolores, Gran Rosario y San Juan; e intentos de saqueos en Rosario con choques con la policía y tiroteos. La huelga recibió el apoyo de los partidos de izquierda, de dirigentes políticos de la oposición oficial⁴⁰ y de la iglesia católica⁴¹. El gobierno, luego de titubear sobre la legalidad del paro, lanzó una ofensiva de propaganda para garantizar la libertad de trabajo de los que no adhirieran y el funcionamiento de los servicios esenciales.

Las siguientes huelgas generales tienen importante adhesión, a pesar de que no hay una plena unidad de acción de los cuadros sindicales, por la ausencia de la CGT (Daer); pero hay un alto grado de acompañamiento por parte de otras fracciones sociales y organizaciones sociales y políticas.

El 21 de marzo de 2001, se realizó una huelga de 24 horas convocada por la CGT (Moyano), la CTA y la CCC. El 20 se realizó una marcha de desocupados a Plaza de Mayo, donde también la CGT (Moyano) y la CTA concentraron 5.000 personas, además de las reunidas en las principales ciudades del interior, contra el ajuste que anunció el ministro Ricardo López Murphy (que renunció y fue reemplazado por Cavallo, lo que llevó a la confirmación de la huelga) y para reclamar el cambio de modelo económico. Adhirieron la CAME, partidos de izquierda y organizaciones de desocupados. Aunque la CGT (Daer) no adhirió porque Cavallo suspendió el paquete económico anunciado, sí lo hicieron algunos de sus gremios. El paro se sintió en gran parte del país, y fue casi total la paralización del transporte automotor, especialmente en el interior, y en la docencia, pero logró también importante adhesión entre los empleados públicos y de otras actividades. Según la CGT tuvo una adhesión superior al 90%. Hubo marchas y manifestaciones de trabajadores ocupados y desocupados, y en algunos lugares de militantes y dirigentes políticos, en Mar del Plata, Córdoba, Catamarca, Santa Rosa, Lomas de Zamora, la City porteña y el Congreso Nacional. Hubo cortes y piquetes de trabajadores tanto ocupados (estatales, docentes, portuarios, judiciales, estudiantes) como desocupados en Mar del Plata, Tucumán, San Juan, Catamarca, Jujuy, San Lorenzo, Mendoza, Chaco, Posadas, Gonnet, La Matanza, Florencio Varela, Morón, Capital y Tres de Febrero.

Después de la suspensión de la huelga general programada para el 5 y 6 de abril, a la espera de los resultados de las medidas económicas anunciadas por el ministro Cavallo, la CGT (Moyano) realizó una concentración el 31 de mayo en Plaza de Mayo, donde su secretario general invitó a no consumir productos de las empresas españolas, por la crisis de Aerolíneas Argentinas, y

Bonafini.

⁴⁰ Incluso de funcionarios del PJ: el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, adhirió y el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf decidió no descontar el día de huelga a los empleados públicos de la provincia.

a considerar la realización de “una pueblada” contra Cavallo como la que en 1975 expulsó del gobierno al ministro José López Rega; la concurrencia al acto fue de militantes sindicales y de partidos de izquierda, sin adhesión de manifestantes espontáneos.

Una semana después, el 8 de junio, se realizó una huelga general, convocada por la CGT (Moyano), sin movilización, para “cambiar el modelo económico de hambre y miseria, salvar a la Nación”, por el aumento del salario mínimo vital y móvil, un subsidio para todos los jefes de hogar desocupados, la defensa de la salud pública y el salvataje de Aerolíneas Argentinas. Fue apoyada por la CTA, la CCC, con movilización y cortes, y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (orientado por Raúl Castells), con ollas populares en Plaza de Mayo. En distintas provincias se realizaron manifestaciones de desocupados. No adhirió la CGT (Daer), que acababa de reunirse con el presidente de la Rúa para tratar de acordar un pacto social. El paro logró importantes niveles de adhesión en el transporte, estatales y docentes, pero el comercio y los bancos funcionaron con normalidad; fue acompañado por numerosos cortes de calles, rutas y puentes, en su mayoría ubicados sobre estratégicos puntos de acceso a las principales ciudades del país, protagonizados por obreros y otros trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y militantes⁴²; también hubo un escrache por desocupados y militantes a una empresa en La Plata.

El 19 de julio se realizó una nueva huelga general por 24 horas, sin movilización, convocada por la CGT (Daer), la CGT (Moyano) y la CTA, después de que el gobierno ratificara la rebaja salarial de empleados públicos y jubilados. Adhirió la CCC, la oposición oficial (bloque de diputados del PJ) y la izquierda, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH, y entidades empresarias como la FAA. La huelga tuvo una fuerte adhesión, tanto en la industria como en el transporte, estatales y docentes. En el marco de la huelga general se produjeron marchas y manifestaciones de trabajadores (en algún caso, desocupados) en Mar del Plata, Córdoba⁴³, Catamarca, Santa Rosa, Lomas de Zamora; cortes de rutas y calles por trabajadores ocupados y, mayoritariamente, desocupados (en Mar del Plata, Tucumán, Catamarca, Jujuy, San Lorenzo, Chaco, Posadas, Gonnet, La Matanza, Florencio Varela, Morón, Capital⁴⁴), piquetes de ocupados (Tucumán, San Juan, Mendoza, Capital y Mar del Plata), escrache (Capital), concentración (de militantes en la City porteña y de trabajadores de Aerolíneas frente al Congreso).

La siguiente huelga general, el 8 de agosto, fue declarada exclusivamente por la CTA, y tuvo escasa repercusión excepto entre los trabajadores estatales, que cumplían el segundo día del paro nacional por 48 horas declarado por ATE, y entre los docentes, que realizaron el paro nacional convocado por CTERA.

⁴¹ El titular de Pastoral Social Raúl Primatesta reconoce a Moyano “como interlocutor válido del pueblo”.

⁴² Por ejemplo en La Matanza, Jujuy, Capital, Corrientes, Gran Rosario, Aguilares y Alberdi (Tucumán), Mendoza, La Plata, Berisso y Ensenada, Cruz Alta (Tucumán).

⁴³ Dirigentes sindicales y políticos.

⁴⁴ En un caso estudiantes, en varios otros militantes y desocupados.

Pero el momento ascendente no se ha detenido. El 13 de diciembre se realiza una huelga general declarada por la CGT (Daer), CGT (Moyano) y CTA, con adhesión de la CCC, y de partidos de izquierda, exigiendo la renuncia del ministro Cavallo y contra las medidas económicas del gobierno, que imponen una mayor bancarización de la economía al mismo tiempo que impiden retirar de los bancos sueldos y depósitos. La huelga es precedida por relativamente pequeñas concentraciones el 12, organizadas por la CGT (Moyano) frente al Congreso Nacional y la CTA en Plaza de Mayo, el mismo día en que la CAME y otros pequeños empresarios organizan un cacerolazo, bocinazo, cortes de calles y apagón a los que se suman espontáneamente vecinos en todo el país. La movilización se hace general en todo el país, incluyendo no sólo las capitales de provincias y ciudades importantes del interior, sino todo el territorio nacional, y no cesa. La huelga general tiene un alto acatamiento, superior al 80% según los medios periodísticos, y en su desarrollo se producen cortes de rutas y accesos a ciudades, protagonizados por militantes políticos y sindicales en Capital, desocupados en Tucumán y Jujuy, y pequeños propietarios agrícolas en Río Negro; también hay lucha callejera en Neuquén, irrupción en la municipalidad en Pergamino y manifestaciones y apedreo de bancos en Córdoba. Esa misma noche comienzan los saqueos de supermercados y otros comercios. Es con esta huelga del 13 de diciembre que comienza el proceso que culmina en el hecho insurreccional del 19 y 20 de diciembre. En esa huelga pueden verse concentrados elementos de la revuelta del hambre (los llamados saqueos), del motín (Pergamino), de la toma y defensa de posiciones y lucha callejera (Neuquén) presentes en los últimos 12 años, y que quedan subsumidos en la huelga general. Pero, al mismo tiempo esa forma, la huelga, queda superada en ese mismo proceso histórico que se desarrolla entre el 13 y el 20 de diciembre. Cuando el 20 de diciembre la CTA (a la mañana y por 24 horas) y las dos CGT (desde las 18) declaran una nueva huelga general, la medida pasa prácticamente desapercibida en medio del hecho insurreccional que culmina en el enfrentamiento en Plaza de Mayo y la caída del gobierno de de la Rúa. En el proceso que va del 13 al 20 de diciembre la huelga general, que al menos desde 1994 había subsumido a las otras formas de lucha, queda a su vez subsumida en la forma insurreccional.

Resultados

Antes de referirnos específicamente al ejercicio de periodización debemos hacer referencia a dos resultados de esta sucinta descripción de los hechos. La realización de huelgas generales y movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales hace observable algo que debería ser obvio pero que ha sido dejado de lado por los discursos dominantes:

- 1) la existencia de formas de protesta como el motín o los “cortes de ruta” no significa la desaparición de las huelgas, que han concitado una adhesión de los trabajadores no inferior al 50%, excepto, quizás, en las de 1988, 1997, 1999 y agosto de

2001; lo que sí se ha producido, desde 1996, es una articulación de instrumentos, como el corte de ruta, en la huelga general.

2) en la década de 1990, estas huelgas y movilizaciones (que tenían como meta defender la legislación existente, resultante de las luchas obreras anteriores, y oponerse a las nuevas condiciones que pueden sintetizarse en la llamada “flexibilización laboral”) lograron detener la implantación total de la flexibilización. Un nuevo avance en la flexibilización laboral sólo pudo ser realizado en 2000 por el nuevo gobierno de la Alianza, en medio de un escándalo desatado por las denuncias de pago de sobornos a los legisladores que votaron la impopular ley, la renuncia del vicepresidente y un enorme descrédito del gobierno.

Respecto del ejercicio de periodización, en lo metodológico, permite advertir la necesidad de no quedar constreñidos, en el análisis de los procesos de luchas sociales, a los criterios académicos tradicionales que periodizan tomando como indicador los cambios en la administración del gobierno. Por ejemplo, resulta observable que el comienzo de un momento descendente en las luchas obreras es anterior al cambio de gobierno en 1989, y que las huelgas generales en 2000 y 2001, después del nuevo cambio de gobierno, no significan una ruptura sino una continuidad con las realizadas durante el gobierno anterior. En cuanto al proceso histórico analizado lo que se puede observar es que el cambio de fase en 1983 se da en un momento de alza de la movilización popular, que incluye las huelgas de 1982 y 1983. Ese momento es seguido por un leve descenso en 1984, al que sigue un ascenso en 1985 y enero de 1986; comienza un proceso de aislamiento en marzo de 1986 que marca el momento descendente que se manifiesta más aún en octubre; aunque sigue un menor grado de alianza en 1987 nuevamente hay unidad y después menor aislamiento social, en un momento de ascenso que se prolonga, con una pequeña inflexión en diciembre de 1987, hasta abril de 1988. Este momento se revierte en septiembre de 1988.

Sigue un lapso sin huelgas generales que termina en un claro movimiento ascendente, desde 1994 hasta que se revierte a fines de 1996, para convertirse en descendente desde 1997, cuando comienza un mayor aislamiento de las luchas de los obreros desde otras fracciones de la sociedad.

En 2000 comienza un nuevo momento ascendente que culmina el 19 y 20 de diciembre de 2001. Si hasta ese momento la huelga general con movilización se presenta como la forma de lucha que articula los distintos instrumentos utilizados por la clase obrera y el pueblo en el período considerado (manifestaciones, “cortes” de rutas y calles de distintos tipos incluyendo toma y defensa de posiciones, motines), en los hechos de esos días la huelga queda subsumida en otra forma de lucha, con características insurreccionales.